EL PAGO DE LOS REEMBOLSOS MEDIANTE LA ENTREGA DE BONOS DE CREDITO

por Enrique C. Barreira

I

EL REGIMEN DE EMERGENCIA ECONOMICA

La ley 23.668 (B.O. 12/6/89) basándose en razones de emergencia económica que afectaban el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado Nacional dispuso que el pago de los importes correspondientes a reintegros, reembolsos o devolución de tributos, con su actualización e intereses, se efectuaría mediante la entrega de títulos de la deuda pública que emitiría el Banco Central de la República Argentina y que recibieron la denominación de TIFISO.

Dichos títulos nunca fueron emitidos, sin perjuicio de lo cual los referidos beneficios dejaron de abonarse con la excusa del régimen antes mencionado.

La ley 23.697 (B.O. 25/9/89) derogó la ley 23.668 y reemplazó aquel régimen por otro mediante el cual se efectuaba el pago a través de la entrega de bonos de crédito que recibieron la denominación de BO-CREX.

Estos últimos tampoco fueron emitidos procediéndose recién en Septiembre de 1990 a instrumentarse certificados representativos de los mismos que comenzaron a ser entregados por los bancos intervinientes en las operaciones de exportación respectivas (1).

Si bien la ley se refiere a "reintegros,

reembolsos y devolución de tributos", debe tenerse presente que los reintegros, tal como los define el art. 825 del Código Aduanero, han caído en desuso (2).

En cuanto a la institución de la "devolución de tributos", este vocablo puede designar institutos diferentes. Por lo que a este trabajo se refiere, tal es la designación que emplea el decreto 1555/86 para referirse a los "reembolsos" definidos en el art. 827 del Código Aduanero. En este último artículo se define a los reembolsos como la restitución que el Estado hace a los exportadores, de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores o de tributos de importación de toda o parte de la mercadería que se exportare para consumo a título oneroso.

La identidad entre los "reembolsos" y la "devolución de tributos" plasmada en el Decreto 1555/86 surge, por otra parte, de los propios considerandos del citado decreto el que invoca, como fundamento de su dictado, lo dispuesto en el art. 9, inc. a), apartado 1) de la ley 23.101 y el art. 829 del Código Aduanero, los cuales hacen referencia, ambos, a los "reembolsos" tal como han sido conceptuados en el párrafo anterior.

II

LINEAMIENTOS DEL BOCREX SEGUN LA LEY 23697

Mediante los arts. 20 y 21 de la ley 23.697 se estableció que el Poder Ejecutivo puede disponer que el pago de los

estímulos a la exportación (reintegros, reembolsos y devolución de tributos) con más su actualización e intereses, se efec-

túe mediante la entrega de un bono de crédito.

Se previó que dicha entrega podía hacerse durante el plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de la ley.

También se contempló la posibilidad de que, una vez finalizada la emergencia, los referidos bonos pudieran aplicarse al pago de los "derechos de importación o exportación sobre las manufacturas de origen agropecuario".

En cuanto a las características del bono en sí, se contempla que el mismo se emite en australes, siendo ajustable por la variación en el tipo de cambio aplicable a las exportaciones de manufacturas. Los referidos bonos son transferibles y deben rescatarse íntegramente en un plazo no mayor a los dos años "contados desde la fecha de emisión".

Es discutible la constitucionalidad de una medida como la adoptada por la ley 23.697. Téngase en cuenta que el crédito de los administrados era un derecho adquirido y la alteración en cuanto al modo y plazos para efectivizar la deuda que mantenía el Estado Nacional con ellos afecta el derecho de propiedad tal como ha sido concebido por la Corte Suprema (3).

No todos los casos pueden resolverse de la misma manera. No es comparable el caso del empresario que tenía derecho a la percepción de un reembolso en el marco de un contrato de promoción industrial y que fue decisivo para alentarle a una inversión que de otra manera no hubiera hecho, que el caso de un comerciante que se hizo acreedor a un reembolso con motivo de una operación marginal. Entre estos dos extremos hay toda una gama de variantes que pueden llegar a justificar soluciones jurisprudenciales distintas (4).

No desconocemos la existencia de la real situación de emergencia por las que pasa el Estado nacional y que justifican este tipo de leyes, lo que no significa justificar la conducta de quienes a cargo del manejo de la cosa pública han provocado el desorden administrativo en que

hoy se debate nuestra Nación y que se hace recaer en los administrados.

Hecha esta aclaración, apuntemos también que, admitida la necesidad, ello no significa que pueda prescindirse de la urgencia, máxime cuando se intenta invadir el área de competencia del Congreso para legislar por decreto. Creemos que en este terreno debe extremarse la prudencia.

Las razones de urgencia existentes en junio de 1989 cuando se dictó la ley 23.668 o en septiembre de 1989 cuando se dictó la ley 23.697 no son igualmente invocables cuando ha transcurrido más de un año y, ya no el Congreso sino el Poder Ejecutivo, quien a través de los decretos de "necesidad y urgencia" ha procedido a legislar con prescindencia del Congreso, con la excusa de una "urgencia" que se hace más dudosa cuanto más tiempo transcurre.

Si la doctrina que justifica este tipo de reglamentos admite su dictado aún cuando el Congreso no se encontrare en receso, exige para ello que la necesidad sea tan súbita (aún cuando se hubiera gestado lentamente), que el Congreso no pudiera tomar cartas en el asunto (5).

En el caso que nos ocupa el Congreso ha intervenido y reglamentado la crisis a través de dos leyes formales; pese a ello el Poder Ejecutivo, habiendo tenido un año o más de tiempo para remediar las súbitas dificultades operadas, insiste a través de decretos con sustancia de ley en la invocación de la misma emergencia muchos meses después de creada la situación.

Consideramos peligroso el acostumbramiento del Poder Ejecutivo a este tipo de remedio que debería ser excepcional y de una gravedad institucional que no debiera perderse de vista, deslizándose de su uso hacia un peligroso abuso (6) que, en caso de existir sólo puede ser acotado por la enérgica y valiente reacción de un Poder Judicial independiente.

Los decretos dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley

modificaron o alteraron el espíritu y a veces la letra de la ley misma. Algunos de ellos fueron más allá de ella al pretender reglamentarla y otros, invocando razones de "necesidad y urgencia" la modifi-

caron alterando los derechos subjetivos de los administrados.

A continuación trataremos de analizar algunos de los puntos más conflictivos en esta materia.

III

LAS PRORROGAS DE LA LEY

El art. 20 de la ley 23.697 disponía, como hemos dicho, que el pago de los reembolsos mediante la entrega de los Borex podía hacerse durante el plazo de 180 días a partir de la vigencia de la ley. Esta ley entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir el 25/9/89 (art. 92). Conforme a la facultad otorgada el art. 87 de la ley, el Poder Ejecutivo prorrogó ese plazo por otros seis meses mediante el art. 8 del Decreto 435/90 (B.O. 6/3/90), con lo cual habría vencido el 25 de Septiembre de 1990.

No obstante el art. 7 del Decreto 1930/90 (B.O. 21/9/90) dispuso que durante un año a partir del día de su publicación, se pagarían también mediante entrega de bonos los reembolsos pendientes de cancelación o que se devengaren durante dicho plazo.

Este último decreto, que fue dictado

invocando razones de necesidad y urgencia motivadas "en la imposibilidad material de obtener un pronunciamiento legislativo en tiempo oportuno" implicó, de hecho una prórroga adicional a la ya consagrada que transgredió en forma expresa al art. 87 de la ley 23.697 el que disponía que la prórroga debía ser "por única vez y por igual período".

De tal manera el Poder Ejecutivo mediante un Decreto dictado bajo el aparente amparo de la doctrina de los reglamentos de necesidad y urgencia transgredió expresamente el plazo máximo de la emergencia dictado por la ley. Nos preguntamos si es aceptable presumir que existe conformidad tácita del Congreso ante su silencio cuando ha sido tan clara su manifestación de voluntad en contrario (volveremos a abordar esta cuestión en el Capítulo IV al que remitimos).

IV

EL PLAZO MAXIMO PARA EL RESCATE

El art. 21 de la ley 23.697 dispone que el bono de crédito "se rescata integralmente en un plazo no mayor a los dos años de la fecha de su emisión".

Este plazo, ratificado en el art. 2 del Decreto 1333/89, fue extendido, sin embargo, en virtud del art. 3 del Decreto 296/90 (B.O. 15/2/90) a cuatro años de plazo.

Este Decreto, dictado al amparo de la doctrina de los reglamentos de necesidad y urgencia, modifica un plazo expresamente establecido por la ley. Cabe a este respecto la misma pregunta que nos hemos hecho antes ¿Puede un decreto, aún cuando se dicte invocando razones de "necesidad y urgencia" de discutible pro-

cedencia, contradecir un mandato tan expreso del propio Congreso?

Consideramos que la interpretación de una voluntad tácita como la que emerge de considerar que el silencio del Congreso implica la necesaria aprobación que este hace del decreto así dictado (7), con todas las dificultades que de dicha doctrina se derivan, no puede llevarse tan lejos como para considerar que esa tácita voluntad aprobatoria se da aún cuando hay una expresa decisión contraria por parte del órgano legislativo.

Ya el hecho de admitir que el Congreso pueda convalidar un decreto del Poder Ejecutivo con sustancia de ley basado en

razones de necesidad y urgencia, conlleva aceptar la "disponibilidad" de su competencia funcional, lo que coloca en crisis el carácter imperativo de las normas de competencia en materia de constitucional (8). Más, aún suponiendo (como lo hace la prestigiosa doctrina citada en la nota 7) que dicha renuncia fuera válida, aceptar que la misma se produce por el

simple transcurso del tiempo sin que haya norma constitucional que habilite dicha consecuencia, significaría dar por tierra con los principios generales del derecho conforme a los cuales la voluntad debe exteriorizarse mediante algún signo inequívoco y que no cabe darle al silencio el carácter de manifestación de voluntad.

V

LA ACTUALIZACION E INTERESES

La ley 23.697 estableció que los importes cuyo pago mediante bonos se contempla son los de los reintegros, reembolsos o devolución de tributos "con su actualización e intereses", si correspondiere. Esto significa que, de corresponder los mismos conforme lo disponen los arts. 838 y 839 del Código Aduanero la ley admite que se calculen los que hubieran sido devengados con anterioridad a la fecha de emisión del título. En tal caso dichos montos integrarían el monto del título mismo.

Mediante el dictado de la resolución 629/90 del Ministerio de Economía (B.O. 17/7/90) se determinaron las fechas en las cuales se habrían devengado los estímulos a la exportación así como también las fechas en que se habrían hecho exigibles el pago de los mismos y el modo en que los bancos intervinientes deben liquidar los importes que deben consignarse en los respectivos BOCREX.

En este último sentido la Resolución distingue entre los montos expresados en divisas y aquellos expresados en moneda nacional de curso legal. Estos últimos son, mayormente, los que emergen de la aplicación del régimen de promoción de la Isla Grande de Tierra del Fuego (Ley 19.640) y son los que presentan mayores inconvenientes ya que el modo de cómputo de los mismos cercena gran parte del beneficio en sí mismo. No nos detendremos en estos últimos que merecen un tratamiento más detenido (9).

En lo que se refiere a los montos expresados en divisas, se mantiene el

valor en moneda extranjera hasta el día 24 de Septiembre de 1989, momento en el cual se convertirán en australes al tipo de cambio cierre comprador del Banco de la Nación Argentina.

Este importe será el que figurará en el bono y, de allí en más, se ajustará de acuerdo a las cláusulas y condiciones que, para el mismo, establece el art. 2° del Decreto 1333/89 con la modificación introducida por el art. 3° del Decreto 296/90.

Como se puede apreciar, la Resolución 629/90 no contempla el cálculo de intereses por el período anterior al 25/9/89. De tal manera, los bonos por los reembolsos cuyos pagos fueron suspendidos de hecho a partir de mayo de 1989, no contemplarían esos importes pese a lo dispuesto por el art. 838 del Código Aduanero.

Con referencia al mismo debe tenerse en cuenta que la tasa de interés aplicable es del 0,74% mensual conforme lo dispone la Resolución n° 5/89 de la Secretaría de Hacienda para los importes establecidos en dólares.

La no inclusión de los intereses en esta Resolución así como en las Circulares del Banco Central que la complementan reviste gravedad en virtud de una norma expresa del Decreto 1333/89 (B.O. 4/12/89).

Este decreto es de los que la doctrina denomina un "reglamento de ejecución" es decir, aquél que se dicta con el objeto de hacer posible la mejor aplicación de la ley formal, logrando un más amplio conocimiento de ella por parte de los adminis-

trados a fin de asegurar su cumplimiento (10).

No se trata, pues, de un reglamento de "necesidad y urgencia" con contenido legislativo, como los que el Poder Ejecutivo ha dictado con frecuencia últimamente en esta misma materia (11).

Ello tiene relevancia, pues un reglamento de ejecución no puede ir nunca más allá de lo que establece la ley que procura reglamentar existiendo una prohibición constitucional que emerge del propio art. 86 inc. 2°.

Sin embargo, el art. 4° del Decreto 1333/89 dispuso que "el recibo de los bonos o la acreditación de los certificados representativos de los mismos en la forma que determine el Banco Central de la República Argentina implicará que el beneficiario no tiene nada más que reclamar por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones que se cancelen con dichos valores, que se extinguirán por novación, renunciando en forma total, absoluta y expresa a toda acción judicial o extrajudicial por tal motivo".

Esta norma restringe los derechos de los administrados más allá de lo que admite la propia ley 23.697 ya que esta última en ningún momento estableció que la recepción de los bonos implicaba la pérdida de este tipo de derechos por parte del administrado.

El principio de que no se puede alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias consagrado en el art. 86 inc. 2 de la Const. Nacional impide que el Poder Ejecutivo pueda agravar la situación o las prestaciones a cargo de los administrados por vía reglamentaria (12).

La novación, siendo un instituto pro-

pio del derecho privado, ha sido concebido sobre la base de dos voluntades concordantes; básicamente la del deudor que es quien más perjudicado se encuentra por las eventuales consecuencias que implican la extinción de los derechos que poseía con anterioridad. Es por ello que el art. 812 del Código Civil dispone que la novación no se presume siendo preciso que la voluntad sea manifestada de una manera clara.

Esto condice con el criterio emergente del art. 874 del Código Civil conforme al cual la intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probar la renuncia debe ser restrictiva.

Consideramos que la ley bien pudo establecer un indicio de presunción más ella debe admitir la demostración en contrario a través de la aceptación de reservas por parte del acreedor tal como lo admite el derecho común en el art. 624 para el caso de la recepción del pago con omisión de los intereses devengados.

Tratándose de un reglamento de ejecución no es admisible que regule ciertas materias que, por su naturaleza, pertenecen al campo jurídico de los Códigos de fondo (13), ni que pueda establecer pérdidas de derechos para los administrados no autorizadas por la ley ni siquiera amparadas por el espíritu o sustancia de la misma (14).

Por otra parte resulta además contrario al principio de derecho de defensa y de ocurrir a un juez imparcial la prohibición que se establece en dicho art. 4° a concurrir a los tribunales nacionales por el sólo hecho de admitir un bono que es el único modo en que el Estado establece la posibilidad de cobro de un importe que es adeuda.

VI

LA APLICACION DE LOS BOCREX PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE ADUANA

El art. 20 de la ley 23.697 dispone que, una vez finalizada la "emergencia" económica, los bonos pueden ser aplicados íntegramente al pago de los "derechos de importación o exportación de las ma-

nufacturas de origen industrial o manufacturas de origen agropecuario".

Consecuentemente, esta ley del Congreso estableció un límite a la cancelación de los derechos de aduana mediante

la entrega de BOCREX, restringiéndola a los derechos de aduana originados, por lo menos, en la exportación de determinadas mercaderías (las manufacturadas).

Más dificultades ofrece el determinar si los derechos de importación están también alcanzados por esta limitación. La redacción del artículo ofrece dudas. No obstante, recurriendo a un método teleológico, cabe pensar que si una de las razones que la ley ha tenido en mira al establecer este límite ha sido el poder contar con fondos genuinos por derechos de aduana debe haberse pensado principalmente en los derechos de exportación más que en los derechos de importación que poseen una gravitación mucho menor que aquellos; lo que condice con el hecho de que el Decreto 173/85, tomado como guía (aún cuando merezca reparos como veremos), está estructurado en función de la exportación.

El límite a este beneficio de poder utilizar los BOCREX como medio cancelatorio, tiene como contrapartida el condicionamiento de que el mismo sólo es viable cuando la operación que genera el tributo se refiera a un determinado tipo de mercadería.

El art. 5 del Decreto 1333/89, al reglamentar esta norma reiteró este criterio pero agregando que para determinar cuales mercaderías debían ser consideradas manufacturadas "se utilizará el Anexo al Decreto 173/85 y complementarios".

Este criterio fue reiterado por la Administración Nacional de Aduanas la que por Circulares télex 513 y 515 instruyó a las aduanas del interior y al Departamento Operacional Capital para que se aceptaran los bonos como medio de pago de los derechos exportación y de importación respectivamente, sólo en caso de tratarse de mercaderías comprendidas en el listado anexo al Decreto 173/85 y sus complementarios.

Sin embargo, varias son las razones por las cuales el listado del Anexo al Decreto 173/85 así como sus complementarios (decretos 2352/85 y Resolución 88/85 del Ministerio de Economía) no debería ser utilizado a estos fines.

El Decreto 173/85 fue establecido a los fines de deducir del pago del impuesto a las ganancias una parte de los ingresos provenientes de las exportaciones.

El objetivo del mismo no tuvo necesariamente en cuenta a los productos manufacturados. Tan es esto así que dentro del listado figuran mercaderías tan alejadas del concepto de manufacturas como lo pueden ser el pescado fresco, los crustáceos y moluscos, la miel natural o las flores, los capullos y las ramas y hojas.

A la vez hay mercaderías típicamente manufacturadas que no han sido incluidas en dicho listado, lo que indica que el listado no puede tomarse como indicativo de lo que debe considerarse manufacturado o no.

Por otra parte, la razón que inspiró la limitación del art. 5 del Decreto 1333/85 perdió relevancia ante el dictado de los decretos posteriores. En efecto, el Congreso mediante la norma del último párrafo del art. 20 de la Ley 23.697, buscó restringir el poder cancelatorio de dichos bonos a fin de reservarse el ingreso en circulante de los derechos de aduana (especialmente derechos de exportación) correspondientes a mercaderías tradicionales.

No obstante, con posterioridad, a través de los decretos 296/90 y 1930/90 se limitó la posible compensación de los derechos de aduana con BOCREX hasta un importe del 15% de los derechos de exportación en juego, con lo cual la limitación que en un principio se buscaba perdió su razón de ser, ya que se ha mantenido un nivel de ingreso efectivo del 85% de cada operación con productos manufacturados y de un 100% de los que no lo son, lo que ha convertido en irrelevante la limitación concebida por la ley 23.697.

Como hemos visto el Decreto 1333/89 es un reglamento de ejecución. Pese a ello, ha cercenado un derecho que la propia ley que intenta reglamentar otorgaba a los administrados, por lo que, en la medida en que pretende recortar derechos expresamente contemplados en la ley, deviene ilegítimo.

VII CONCLUSIONES

De todo lo expuesto concluimos que:

1) El régimen de cancelación de reembolsos mediante la entrega de bonos de crédito ha sido delimitado por ley del Congreso de una manera clara y coherente.

2) Aceptada la legitimidad de la ley 23.697 en cuanto hubo razones que justificaron la restricción de los derechos patrimoniales de los administrados, el Poder Ejecutivo no puede ir más allá de lo que el propio Congreso estableció.

3) Lo expresado en el punto anterior es claro en los casos de alteraciones a la ley emergentes de decretos de "ejecución", pero también lo es respecto de los decretos "de necesidad y urgencia" en la medida en que contradicen expresas normas sentadas por el Congreso en el texto legal. En este último aspecto es improcedente considerar que hay una voluntad aprobatoria tácita del Congreso.

4) En el sentido expresado, la prórroga del período de emergencia de la ley mediante el art. 7 del Decreto 1930/90 transgrede la expresa norma del art. 87 de la Ley 23.697.

5) El Decreto 296/90 extiende el plazo de rescate de los bonos de crédito al doble del máximo contemplado por la ley del Congreso. El hecho de que dicho decreto se arroge facultades legislativas no empece a su ilegitimidad en cuanto hay una voluntad expresa del Congreso en contrario.

6) La Resolución 296/90 del Ministerio de Economía, ha desconocido el derecho de los administrados a que se compute a su favor la actualización e intereses correspondientes a la mora por períodos anteriores a la fecha de emisión de los bonos de crédito.

7) El art. 4 del Decreto 1333/89 en cuanto considera que la recepción de los bonos implica extinción de la deuda anterior por novación (con prescindencia de la voluntad real del administrado y sin dar otras posibilidades de cobro) e implica, también, la renuncia a toda acción judi-

cial o extrajudicial, es ilegítimo y contrario a expresas normas constitucionales por desbordar los límites de la ley que intenta reglamentar, recortando los derechos por ella reconocidos e impedir el acceso a la justicia.

8) El art. 5 del Decreto 1333/89 al determinar el concepto de lo que debe entenderse por mercaderías manufacturadas mediante la remisión a un listado que no contempla a dichas mercaderías, cercena derechos concedidos por la ley del Congreso que aduce reglamentar.

NOTAS:

(1) Resolución (M.E.) 629/90 y Comunicaciones del Banco Central "A" 1665 y "A" 1702.

(2) La razón de ser de este desuso radica en que los reembolsos posibilitan la devolución tanto de los tributos interiores como de los derechos de importación por lo que resulta más ventajoso este último sistema.

(3) Es decir, como todo aquel interés apreciable que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad, caso "Pedro Emilio Bourdieu c/Municipalidad de la Capital s/devolución de sumas de dinero", Fallos Tomo 145, pag. 307 y siguientes, especialmente pags. 327/328, y muchos más.

(4) Tal como ha sucedido en materia de congelamiento de los depósitos a plazos fijos en donde la jurisprudencia ha tenido muy en cuenta las particularidades del caso.

(5) LINARES, Juan Francisco, "Derecho Administrativo", Ed. Astrea, 1986, pag. 109.

(6) Decía Bertrand Rusell que "debido al amor al poder que se debe esperar en aquellos que adquieren puestos de gobierno, toda organización, en ausencia de una fuerza que actúe en sentido contrario, tenderá a aumentar en tamaño y en densidad de poder ("El poder en los hombres y en los pueblos", Editorial Losada, 1946, pag. 143).

(7) VILLEGAS BASABILVASO, Benjamín; "Derecho Administrativo", Tomo I, pag. 290; MARIENHOFF, Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, Tomo I, pag. 256 y siguientes; DROMI, José Roberto, "El acto administrativo", Madrid, 1985, pag. 273.

(8) El origen jurídico legal de la competencia concuerda con el advenimiento del constitucionalismo al consagrar el principio de la separación de los poderes, siendo uno de sus caracteres la "improrrogabilidad" en razón de hallarse establecido en interés público y porque la competencia surge de una norma estatal y no de la voluntad de los administra-

dos ni de la voluntad del órgano en cuestión (MARIENHOFF, Miguel S. obra citada, Tomo I, pag. 542 (nro. 186) y pag. 546 (nro. 189-b).

(9) Ver el trabajo del Dr. Jorge E. RODRÍGUEZ LARRETA en esta misma revista.

(10) DIEZ, Manuel M. "Derecho Administrativo", Omeba, 1963, pag. 421; MARIENHOFF, Miguel S., obra citada, Tomo I, pag. 240; CASSAGNE, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, 1986, Tomo I, pag. 133; LINARES, Juan Francisco, obra citada, pag. 67/68.

(11) Por ejemplo Decretos 296/90, 435/90, 1930/90, etc.

(12) LINARES, Juan Francisco, ob. citada, pag. 68.

(13) ESTRADA, Juan Ramón de, "La potestad reglamentaria de la administración", La Ley 1985-D-1026, en especial Capítulo III y nota 6.

(14) Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso "Gregoria Fuertes de Diez c/Nación Argentina" del 19/7/40 (Fallos 187-260) y "Mariano Aguirre c/Nación Argentina" del 14/6/40 (Fallos 187-44).